

SE SUSCRIBE

En Madrid en el despacho de libros de la IMPRENTA NACIONAL.

PRECIOS DE SUSCRICION.

MADRID... Por un mes... 12 rs. Por tres meses... 36

SE SUSCRIBE

En provincias en todas las ADMINISTRACIONES DE CORREOS. En Paris, C. A. SAAVEDRA, rue de Richelieu, núm. 97.

Se reciben los anuncios todos los dias en la Administracion, de diez de la mañana á cuatro de la tarde.



PRECIOS DE SUSCRICION.

Table with subscription rates for different provinces and regions like Provincias, Ultramar, and Extranjero.

No se recibirá bajo ninguna pretexto carta ni pliego que no venga franqueado.

GACETA DE MADRID.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

REALES DECRETOS.

De acuerdo con mi Consejo de Ministros, Vengo en nombrar Gobernador de la provincia de Sevilla á D. Fernando Balboa, que desempeña igual cargo en la de Málaga.

Dado en Palacio á doce de Enero de mil ochocientos sesenta y cinco.

ESTÁ RUBRICADO DE LA REAL MANO.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, RAMON MARIA NARVAEZ.

De acuerdo con mi Consejo de Ministros, Vengo en nombrar Gobernador de la provincia de Málaga á D. Joaquin Alonso, que desempeña igual cargo en la de la Coruña.

Dado en Palacio á doce de Enero de mil ochocientos sesenta y cinco.

ESTÁ RUBRICADO DE LA REAL MANO.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, RAMON MARIA NARVAEZ.

Vengo en mandar que el nombramiento de Senador del Reino hecho en favor de D. Lorenzo Flores Calderón por Real decreto de 30 de Diciembre del año último, se entienda conforme al párrafo décimotercero del art. 15 de la Constitución.

Dado en Palacio á trece de Enero de mil ochocientos sesenta y cinco.

ESTÁ RUBRICADO DE LA REAL MANO.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, RAMON MARIA NARVAEZ.

MINISTERIO DE MARINA.

REALES DECRETOS.

Vengo en relevar del cargo de Vocal del Consejo de administracion y gobierno del fondo de redencion y enganches de los matriculados de mar destinados al servicio de los buques del Estado, al Intendente de Marina Don Rafael Escriche y Mingorance, por haber cesado en la Direccion de Contabilidad del ramo.

Dado en Palacio á cuatro de Enero de mil ochocientos sesenta y cinco.

ESTÁ RUBRICADO DE LA REAL MANO.

EL MINISTRO DE MARINA, FRANCISCO ARNERO.

Vengo en nombrar Vocal del Consejo de administracion y gobierno del fondo de redencion y enganches de los matriculados de mar destinados al servicio de los buques del Estado, al Intendente y Director de Contabilidad de Marina D. Vicente de Azas y Gil Taboada.

Dado en Palacio á cuatro de Enero de mil ochocientos sesenta y cinco.

ESTÁ RUBRICADO DE LA REAL MANO.

EL MINISTRO DE MARINA, FRANCISCO ARNERO.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de la Gobernacion, y de acuerdo con lo informado por la Seccion de Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se concede á D. Vicente Mice-liz, nacido en Trípoli de Berberia, la naturalizacion en estos Reinos que tiene solicitada, entendiéndose que esta ha de ser de cuarta clase, con arreglo á las antiguas leyes de la Monarquía.

Art. 2.º La expresada cesion no producirá su efecto hasta tanto que el interesado haya prestado juramento de fidelidad á mi Persona y de obediencia á las leyes, con renuncia de todo pabellon extranjero.

Dado en Palacio á ocho de Enero de mil ochocientos sesenta y cinco.

ESTÁ RUBRICADO DE LA REAL MANO.

EL MINISTRO DE LA GOBERNACION, LUIS GONZALEZ BRAVO.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Direccion general de Agricultura, Industria y Comercio.—Montes.

Ilmo. Sr.: Para llevar á efecto lo prevenido en la regla 4.ª del art. 3.º del Real decreto de 16 de Marzo de 1859, S. M. la REINA ha tenido á bien adoptar las disposiciones siguientes:

1.º Ascender á Ingenieros Jefes de primera cla-

se del cuerpo de Montes, con el sueldo de 24.000 reales anuales, á los que lo son de segunda clase D. Pedro Bravo y Quejido, que ocupará el núm. 1.º; D. Esteban Boutelou y D. Antonio Campuzano, que continuarán en clase de supernumerarios segun su orden, despues del núm. 1.º; D. Joaquin Maria de Madariaga y Ugarte, con el núm. 2; D. Máximo Laguna y Yillanueva, el 3; D. Francisco Garcia y Martino, el 4; Don Francisco Ramirez y Carmona, el 5; D. Ramon de Xerica é Idigoras, el 6; D. Dionisio Unceta y Sentestillano, el 7; D. Esteban Nagusia Riocel, el 8; D. Manuel del Valle y Alonso, el 9; D. Andrés Anton Villacampa, el 10; D. Demetrio Perez Albert, el 11; Don Manuel del Pozo y Alvarez, el 12; D. Manuel Solans Aviso, el 13; D. Gabriel Bornás y Esain, el 14; y Don Antonio Martinez Borderes, el 15.

2.º Ascender á Ingenieros Jefes de segunda clase, con el sueldo de 48.000 rs. anuales, á los Ingenieros primeros D. Roque Leon del Rivero, que ocupará el núm. 1.º; D. Joaquin Maria Gorostegui y Garagarza, el 2; D. José Gomila y Carreras, el 3; D. Emilio de Roda Sanchez, el 4; D. Carlos Maria Martel Agudo, el 5; D. Luis Gomez Yuste, el 6; D. Luis de Urréjola Olague-Feliu, el 7; D. Pablo Gonzalez de la Peña, el 8; D. Mariano Santias Riglos, el 9; D. Luis Bengoechea Gutierrez, el 10; D. Luis Bravo Barrera, el 11; D. Isidoro Jimenez Montañana, el 12; D. Saturnino Briones Rubio, el 13; D. Manuel Casimiro Albeniz, el 14; Don Ignacio Macias de Arévalo, el 15; D. Manuel Llorá y Ruiz, el 16; D. Juan Gonzalez de Valdés, que seguirá de supernumerario inmediatamente despues; D. Lucas de Olszabal, el 17; D. Bernardo Tapia, el 18; D. José Diaz Labiada, el 19; D. Francisco Parrondo, el 20; Don Miguel Fernandez Balmaseda, el 21; D. Luis Espinosa y Perez, el 22; D. Feliciano Garcia y Garcia, el 23; D. Juan Villota y Urroz, supernumerario con sueldo á continuacion de este número; D. Hilarión Ruiz Amado, el 24; D. Juan B. de la Torre, Conde de Torrepando, el 25; D. Agustín Romero y Lopez, el 26; D. Salvador Cerón Martínez, el 27; D. Sabino Calvo Gutierrez, el 28; D. Pedro Mateo Sagasta, el 29; D. José Jordana y Morera, el 30; D. Luis Satorras y Vilanova, el 31; Don Eduardo Conde Perez Calleja, el 32; D. Antonio Garcia de Quevedo, el 33; D. Juan José de Herrán y Ureta, el 34; D. Joaquin Alfonsesi y Feliu, el 35; D. José Esquerre, el 36; D. Francisco de Paula Portuondo, que seguirá de supernumerario inmediatamente despues; D. Ramon Jordana y Morera, el 37; D. José Bragat, el 38; D. Pablo Pebrer, el 39; y D. Buena-ventura Bachiller de los Albitos, el 40.

3.º Confirmar en la clase de Ingenieros primeros con el sueldo anual de 42.000 rs. al que lo es de la misma D. Juan Cruet y Guillén, que ocupará el número 1.º; y ascender á la propia clase con el referido sueldo de 42.000 rs. á los Ingenieros segundos D. Miguel Colina, con el núm. 2; D. Fermín Larrzábal, el 3; D. Martín Paseual el 4; D. Agustín Garcia Ortiz, el 5; D. Angel Estéve y Lopez, el 6; D. Silbano Cruet y Guillén, el 7; D. Francisco Romero y Cerdena, el 8; D. José R. Inchaurreandieta, el 9; Don Eduardo Pardo y Moreno, el 10; D. Luis de la Escosura Coronel, el 11; D. Antonio Castellano y Castillo, el 12; D. Antonio Veas y Silva, el 13; D. Ladislao Carrasosa y Jimenez, el 14, y D. José de Musso y Moreno, el 15.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4.º de Enero de 1865.

GALIANO.

Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Madrid y el Juez de primera instancia de Navalcarnero, de los cuales resulta:

Que D. Cirilo Bahía, en concepto de propietario de tres fincas próximas á la carretera en construccion desde Madrid á San Martín de Valdeiglesias, presentó ante el Juzgado de primera instancia de Navalcarnero querrela criminal de hurto contra D. Angel Iraola y otros 12 consortes, porque como representante el primer constructor, habian extraido piedra de las expresadas fincas, y con destino á las obras, sin consentimiento del dueño, y no obstante la oposicion que á nombre de este demostraron en diversas ocasiones los guardas y otras personas encargadas al efecto por el mismo propietario:

Que admitida la querrela y practicadas las primeras informaciones, mandó el Juez unir al proceso testimonio de otro que en el mismo Juzgado se formó contra Miguel Alcoy y Alfonso Aparicio por hurto de piedras en fincas del mismo D. Cirilo Bahía antes citado, de cuyo testimonio aparece que al comenzar el procedimiento criminal, el Gobernador de la provincia de Madrid requirió de inhibicion al Juez por tratarse de un asunto referente á las condiciones de un contrato de obras públicas, cuyo conocimiento era peculiar de la Administracion; y que estimado por el Juez el requerimiento, dictó auto de inhibicion conforme con el dictámen del Promotor fiscal:

Que fundado el Juez en este antecedente, y de conformidad tambien con el Promotor fiscal, dió providencia, inhibiéndose del conocimiento de la nueva causa promovida por Bahía, el cual, luego que tuvo conocimiento de ello, apeló ante la Audiencia del

territorio, que dejó sin efecto la inhibicion acordada por el Juzgado:

Que en este estado, y cuando el Juez se hallaba prosiguiendo las actuaciones en cumplimiento de lo mandado por el Tribunal superior, le requirió de inhibicion el Gobernador de la provincia de Madrid, á instancia del contratista de las obras de la carretera de que se ha hecho mérito, fundándose en que existe en el presente caso una cuestion previa administrativa, de cuya decision pende el fallo que hubiere de dictarse por los Tribunales en la causa criminal promovida por D. Cirilo Bahía, en razon á que hay necesidad de apreciar alguna de las condiciones del contrato relativas á los materiales que habian de emplearse en las obras; siendo además notorio que la falta en que los procesados hayan podido incurrir, es susceptible de correccion por parte de la Administracion, segun las Reales disposiciones vigentes que citaba:

Que comunicado el oficio de requerimiento al Promotor fiscal y á la parte querrelante, opinó el primero que debia el Juzgado acceder á la inhibicion pretendida, y el segundo sostuvo la competencia de la jurisdiccion ordinaria, recaeando por fin providencia, en la que al propio tiempo que se desestimó la inhibicion solicitada por el Promotor fiscal, se mandó pedir al Gobernador su autorizacion para continuar los procedimientos contra D. Angel Iraola y consortes, debiendo consultarse esta providencia con el Tribunal superior antes de su ejecucion:

Que la Audiencia confirmó el auto consultado en cuanto declaraba no haber lugar á la inhibicion, mandando devolver las actuaciones al Juzgado para que se limitase á sostener su competencia en la forma legal:

Que en su consecuencia dictó el Juez auto, en el que se limitó á mandar que se librase exhorto al Gobernador de la provincia, con insercion de los dos escritos del ministerio público, del de la parte querrelante y de la providencia del Tribunal superior, á fin de que la Autoridad administrativa dejase expedita la jurisdiccion ordinaria, ó de lo contrario tuviese por formada la competencia:

Que el Gobernador, conforme con el Consejo provincial, insistió en el requerimiento, añadiendo al Juez que no se consideraba en el deber de razonar nuevamente su pretension, porque el Juzgado habia dejado de consignar los fundamentos de su determinacion contra lo expresamente dispuesto en el reglamento de 25 de Setiembre de 1863, de todo lo cual resultó el presente conflicto:

Visto el art. 60 del Reglamento de 25 de Setiembre de 1863, que acerca de la sustanciacion de los incidentes de competencia dispone que, citadas las partes y el Ministerio Fiscal, con señalamiento de dia para la vista; el Tribunal ó Juzgado requerido proveyerá auto motivado, declarándose competente ó incompetente:

Visto el art. 61 del mismo reglamento segun el cual cuando un Juez ó Tribunal de primera instancia dicte auto declarándose competente ó incompetente, se sustanciará el artículo en segunda instancia, si las partes ó el Ministerio fiscal apelaren de aquel:

Visto el art. 63 del mismo reglamento en que se establece que cuando el requerido se declare competente por sentencia firme exhortará inmediatamente al Gobernador para que deje expedita su jurisdiccion, insertando los dictámenes del Ministerio fiscal, y los autos motivados con que en cada instancia se haya terminado el artículo:

Considerando: 1.º Que en la sustanciacion del incidente de competencia á que se refiere este expediente, no aparece haberse hecho la citacion y señalamiento de dia para la vista, asi como tampoco resulta que las providencias dictadas en ambas instancias con el fin de sostener la competencia de la jurisdiccion ordinaria sean motivadas al tenor de lo prescrito en el art. 60 del citado reglamento de 25 de Setiembre de 1863:

2.º Que por consecuencia de esta omision, no ha podido tener efecto la prescripcion que habla el artículo 63 del mismo reglamento relativa á la insercion en el exhorto del Juez requerido de los autos motivados que hubieren recaído en ambas instancias:

3.º Que los términos en que aparece formulada la sentencia del Juez de primera instancia de Navalcarnero no están conformes con las prescripciones de los mismos artículos que quedan citados, puesto que en vez de declararse competente ó incompetente, poniéndolo inmediatamente en conocimiento del Gobernador si las partes no apelaron, proveyó lisa y llanamente que no habia lugar á la inhibicion pretendida por el Ministerio Fiscal, y que debia pedirse al Gobernador autorizacion para proseguir las actuaciones con suspension de la ejecucion de esta providencia, hasta que fuese aprobada por el Tribunal superior:

4.º Que las omisiones é irregularidades de que se ha hecho mérito constituyen vicios sustanciales en el procedimiento que deben ser subsanados en la forma prevenida, antes de resolver definitivamente sobre el conflicto suscitado;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno,

Vengo en declarar mal formada esta competencia y que no ha lugar á decidirla.

Dado en Palacio á catorce de Diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.

ESTÁ RUBRICADO DE LA REAL MANO. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, RAMON MARIA NARVAEZ.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

El Gobernador Capitan general de las Islas Filipinas participa al Sr. Ministro de Ultramar en 21 de Noviembre último que el orden y tranquilidad prosiguen sin alteracion, y que la salud pública es satisfactoria.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 11 de Enero de 1865, en los autos que penden ante Nos por recursos de casacion, seguidos en el Juzgado de primera instancia del distrito de la izquierda de la ciudad de Córdoba y en la Sala primera de la Real Audiencia de Sevilla, por D. Rafael de Córdoba Trenas contra D. Rafael Alonso Valenzuela, sobre pago de cantidades:

Resultando que este último y D. Bonifacio Gallegos tomaron en arrendamiento por escritura pública de 26 de Noviembre de 1851 el caudal de Armenta de las caudales en los libros segun años á continuacion:

Resultando que no pudiendo conseguir Córdoba Trenas que Alonso le formase la cuenta definitiva, le remitió la general, que obra en autos, y que formó en 5 de Febrero de 1858 bajo el epigrafe: «Liquidacion que debe practicarse entre D. Rafael Alonso y D. Rafael de Córdoba y Trenas y que presenta este del resultado de las especulaciones que mancomunadamente han seguido desde 11 de Enero de 1831 hasta la conclusion del arrendamiento del caudal de Armenta, expresiva de las cantidades que en metálico y del producto de los bienes han entrado en poder de Trenas y sus inversiones.» En la cual del cargo y data aparecen abonados de exceso á D. Rafael Alonso 409.265 rs.:

Resultando que en 20 de Abril del mismo año de 1858 D. José Ordoñez y D. Zacarias de Lara, nombrados por Córdoba Trenas y Alonso, segun expresaron, para examinar las cuentas presentadas por el primero, de los gastos y productos del arrendamiento de Armenta en los cuatro años que le habian llevado, y formar la correspondiente liquidacion á cada uno para venir á probar el estado en que ambos se encontraban, y verificar el reintegro mútuo de las cantidades que resultasen á favor de cada uno, consignaron en documento privado, que habian hecho dichas operaciones escrupulosas y detenidamente y con toda imparcialidad, teniendo á la vista todos los documentos que les presentaron los interesados, y haciendo varias observaciones para su mayor inteligencia y claridad, deduciendo por resultado de todo un alcance á favor de Córdoba Trenas de 33.373 rs. 32 maravedis que debia abonarle D. Rafael Alonso: lo cual, para que asistiese y en cumplimiento de su encargo, concluyeron diciendo firmaban la presente, de que daban copia á cada uno de los interesados, que deberian firmar á continuacion su conformidad:

Resultando que al pie de la copia entregada á Trenas, puso este dos reparos demostrativos de haberle perjudicado en 99.912 rs., que unidos á los 23.373 que se le abonaban, hacian subir su alcance á 123.286 rs. 4 y medio maravedis, y que vistos dichos reparos por el liquidador Ordoñez, puso á continuacion una nota manifestando que los crea justos y en su lugar, y añadiendo, que como dichas cuentas las habia formado Lara, asegurándole que estaban bien, no tuvo inconveniente en firmarlas, creyendo que así seria en honor á la buena reputacion y fama que tenia:

Resultando que en tal estado y despues de pedir Córdoba y Trenas con insistencia que Alonso presentase el ejemplar original de la liquidacion, que recibió firmada por los contadores, y de presentarle Alonso un borrador sin firma alguna, con varios tachaduras y enmendadas, diciendo haberle encontrado en el estudio de su Abogado, propuso Córdoba y Trenas la presente demanda en 11 de Abril de 1859 pidiendo que se condenase al D. Rafael Alonso á que le pagase en dinero metálico 127.286 rs. y 4 y medio maravedis que le adeudaba por resultados de la sociedad, ó apareciera que habian tenido en el arrendamiento del caudal de Armenta con las costas y abono del rédito legal; alegando además de los hechos ya referidos, que ambos litigantes tuvieron y labraron en aparceria el caudal mencionado durante cuatro años, que terminada la sociedad, formó Alonso con vista de los libros un resumen general de todos los gastos y productos, resistiéndose á presentar la cuenta definitiva, por lo cual nombraron para ese efecto de comun acuerdo á los dos expresados Contadores, quienes evacuaron su cometido con vista de todos los documentos relativos al asunto, firmando la correspondiente liquidacion, de que dieron un ejemplar á cada uno de los interesados; que no obstante haberse negado Alonso á presentar la copia original por él recibida, para que no se viese, que en ella puso su conformidad aprobando lisa y llanamente todas las partidas de cargo y data como ajustadas exactamente á sus propios libros y asientos, estaban, sin embargo, consignadas en la llamada copia, que habia producido, cuantos antecedentes se necesitaban para declararle competente al pago de los 123.286 rs. que le reclamaba y al de los 3.000 que percibió de D. Agustín de Horcas como entregados por el demandante en Caba á D. Manuel Andrés:

Resultando que D. Rafael Alonso contestó pidiendo se le absolviese libremente de la demanda y se condenase á Trenas á que en el término de tercer dia reformase completamente y justificase las cuentas, con apercibimiento que de no hacerlo estaria y pasaria por las que el exponente presentase, para lo cual le reconvieno por mutua peticion alegando, despues de negar que hubiesen tenido sociedad para labrar las fincas de Armenta, las cuales sostenia habia arrendado por sí y para sí, no habiendo tenido Trenas otro carácter que el de simple encargado suyo, para estar al frente y cuidado de las labores, que como tal le rindió una cuenta que le devolvía para que pasase los vicios y defectos que tenia, así como otras dos sucesivas por iguales motivos, y la última además por hallarse basada en un supuesto falso; que, sin embargo, queriendo dar el exponente una prueba de su buena fe, se prestó á que reconociera las cuentas D. Zacarias de Lara con el expreso y terminante encargo de que se reformasen y presentasen en forma y bajo el principio de que Trenas figurase con el verdadero carácter de encargado con que únicamente habia sido revestido; que como Lara y D. José Ordoñez, á nombre de Trenas, hicieron una liquidacion sin estar autorizados competentemente, admitiendo y reconociendo á este último una personalidad de que carecia, y faltando á todas las prevenciones y requisitos propuestos, se negó á prestarla su aprobacion y mucho más á autorizarla con su firma; por consiguiente, era de absoluta necesidad que se le condenase y compeliere á cumplir con la obligacion en que se encontraba con mayoría de razon, cuando aparecia disminuido su cargo en muchas y muy considerables partidas y con repeticiones y abusos que no era lícito ni justo tolerar:

Resultando que las pruebas que ambos litigantes articularon se dirigieron principalmente á justificar si hubo ó no sociedad; si Alonso se conformó ó no con la liquidacion de los contadores Ordoñez y Lara, y acerca de su legitimidad y validacion; y que en su vista el Juez dictó sentencia en 23 de Agosto de 1861, que modificó la Sala

primera de la Audiencia en 2 de Diciembre de 1862, confirmando en cuanto por ella se condenaba al D. Rafael de Alonso Valenzuela á que en el término de 10 dias diese y pagase á D. Rafael de Córdoba y Trenas la cantidad de 127.286 rs. 4 y medio maravedis que le era en deber por resultados de la sociedad ó apareciera que con ésto tuvo en el caudal nombrado de Armenta, término de la ciudad de Caba, propio del Marqués de Valdeoleros, que le arrendó en el 26 de Noviembre de 1851 hasta 31 de Diciembre de 1855, revocándola en los demás extremos y absolviéndolo á D. Rafael de Córdoba y Trenas de la reconvencion que por mutua peticion le hacia D. Rafael Alonso Valenzuela:

Y resultando que este dedujo recurso de casacion contra el indicado fallo por haberse infringido con él en su concepto las leyes 1.ª, tit. 10, Partida 5.ª, 78 y 79, tit. 18, Partida 3.ª y los artículos 821 y siguientes de la de Enjuiciamiento civil, puesto que se reconocia la existencia de la compañía, sin estar acreditada con pruebas documentadas, y se estimaba el trabajo de los liquidadores, sin embargo de haberse estos abrogado facultades propias de los amigables componedores:

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Laureano de Arrieta:

Considerando que el contrato de compañía ó sociedad se perfecciona por el consentimiento de los contratantes con arreglo á lo dispuesto en la ley 1.ª, tit. 10, Partida 5.ª, citada por el recurrente, y que, por consecuencia, puede ser justificado, no solamente por documentos públicos ó privados, sino tambien por los demás medios de prueba que el derecho reconoce:

Considerando que las leyes 78 y 79 del tit. 18, Partida 3.ª no exigen que dicho contrato se reduzca á escritura pública, sino que señalan la fórmula y términos en que esta debe ser extendida cuando se refiera al mismo y haya de ser presentada en juicio, así como las demás leyes del propio título consignán las fórmulas y condiciones que deben tener las escrituras de toda clase de contratos para que sean valideras y constituyan prueba judicial:

Considerando que la Sala sentenciadora ha juzgado demostrada la existencia de la sociedad que es objeto del presente litigio, entre D. Rafael Alonso y D. Rafael Córdoba Trenas, igualmente que los resultados de aquel contrato para cada uno de estos dos interesados, á virtud de las pruebas de toda especie que estos han suministrado, sin que contra su apreciacion se haya alegado por el recurrente infraccion de disposicion legal ninguna:

Considerando que dicha Sala no atribuyó, ni pudo atribuir á D. Zacarias de Lara y D. José Ordoñez el carácter de amigables componedores, pues que no dictaron resolucion alguna que decidiese las contestaciones de ambos socios, sino que aceptó, como autorizado y consentido por estos, el trabajo material de redaccion de la cuenta y liquidacion que practicaron á virtud del encargo que dichos interesados les confirieron y en vista de los datos, antecedentes y comprobantes que los mismos les suministraron:

Considerando por todo ello que en la sentencia cuya casacion se pide no ha sido infringida ninguna de las leyes ni ninguno de los artículos de la de Enjuiciamiento civil que se citan por el recurrente:

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casacion interpuesto por D. Rafael Alonso Valenzuela, á quien condenamos en las costas; y devuélvase los autos á la Audiencia de donde proceden con la certificacion correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la GACETA é insertará en la Coleccion legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Garcia de la Cotera.—Gabriel Ceruelo de Velasco.—Joaquin Melchor y Pinazo.—Pedro Gomez de Hermosa.—Ventura de Cols y Pando.—Por ausencia del Sr. Cáceres, Manuel Garcia de la Cotera.—Laureano de Arrieta.

Publicacion.—Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Ilmo. Sr. D. Laureano de Arrieta, Ministro de la Seccion primera de la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la misma hoy dia de la fecha, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado.

Madrid 11 de Enero de 1865.—Licenciado, Luis Calatravejo.

ANUNCIOS OFICIALES.

Departamento de Liquidacion de la Direccion general de la Deuda pública.

DEUDA DEL PERSONAL.

Relacion de las liquidaciones del personal que han resultado corrientes y han sido aprobadas por la Junta de la Deuda pública, cuyos saldos se comprondrán en certificacion para la emision de títulos tan pronto como se reclamen por los interesados, y se bastantem por el Ministerio fiscal los documentos de personalidad que se presenten por los mismos.

Table with columns: Número de las liquidaciones, Nombre de los acreedores, Importe del crédito. Lists names like D. Agustín Almenara, D. Miguel Albert, etc., with corresponding amounts.





